

INTERVENCIÓN DE JOSÉ BLANCO EN LA TRIBUNA DEL FORUM EUROPA

Madrid, 15 de febrero de 2018

Buenos días,

Antes de nada, permítanme agradecer a José Luis su amable invitación a participar en este foro y su ejemplaridad, por lo demás conocida, a la hora de organizarlo.

Agradecer también y singularmente a Cristina Narbona que haya aceptado la invitación para poder estar aquí acompañándonos esta mañana. Sus reflexiones en cualquier ámbito son siempre reveladoras. Pero más aún si cabe en una materia que domina con maestría como son las políticas energéticas y ambientales.

Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que me hayan honrado con su presencia. Intentaré que no lamenten haber acudido.

Hablar del cambio climático es hablar de uno de los principales desafíos de la humanidad, sino el principal. Y admitir esto, contrariamente a lo que podría parecer, es esperanzador: hoy, frente a lo que ocurría no hace tanto tiempo, hay un acuerdo general sobre la realidad del calentamiento global, sobre la influencia humana en el mismo a través de la emisión de gases de efecto invernadero y sobre la necesidad de combatirlo.

El clima está cambiando, lo que entraña riesgos cada vez más graves para los ecosistemas, la salud humana y la economía.

El coste global anual estimado de los desastres naturales asciende a unos 520.000 millones de dólares. El número de refugiados supera los 65 millones de personas, la mayoría concentradas en zonas críticas del cambio climático. Informes de Naciones Unidas alertan de 250 millones de personas que pueden verse desplazadas por sus consecuencias en 2050. No ponerle freno puede acabar elevando el nivel de los mares en 2 metros. Y conviene recordar que dos tercios de la humanidad vive en zonas costeras.

Las advertencias son constantes.

El último informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, alerta de “impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales” derivados de este.

En esa línea, un reciente estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que las regiones de Europa enfrentan graves riesgos derivados del calentamiento global, como la

subida del nivel del mar, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, las sequías y las tormentas.

Y el reciente informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales constata la prominencia que han cobrado los riesgos ambientales en los últimos años, situándose entre los prioritarios tanto en términos de probabilidad como de impacto.

Pero, más allá de los datos y de los informes de expertos, el cambio climático es una realidad palpable:

- En 2017, hemos asistido a una de las temporadas de huracanes más intensas y devastadoras conocidas.
- Los tres últimos años han sido los tres más cálidos en el mundo desde que se tienen registros. En España, 2017 ha batido récords.

Puede que haya quien no quiera afrontar la realidad del cambio climático. Pero sus consecuencias nos golpean. Cada día con más virulencia.

Un solo dato lo expresa mejor que cualquier frase: más de 400.000 europeos mueren al año de forma prematura por la contaminación del aire, una cifra que, en todo el mundo, se eleva a los 3,7 millones de personas.

Ante esto es necesario actuar. Especialmente cuando, tras tres años de estancamiento, las emisiones mundiales de CO2 han vuelto a crecer en 2017.

Como advertía recientemente el Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático, “el tiempo se está acabando para nuestra capacidad de contener el calentamiento global”.

Conscientes de ello, hace poco más de dos años en París el conjunto de las naciones del mundo se comprometió a limitar la subida de temperaturas por debajo de 2 grados y a hacer esfuerzos para dejarla en 1,5 grados sobre los niveles pre-industriales.

Podemos decir, con orgullo, que la Unión Europea y sus Estados miembros desempeñaron un papel crucial en la consecución de este acuerdo. Pero también lo han hecho en su defensa tras la espantada del Gobierno de Estados Unidos, al reafirmar su compromiso de liderar la lucha mundial contra el cambio climático.

Desde luego, en este ámbito a la Unión Europea la avala una trayectoria de largo recorrido, que se remonta a los años 90 con los programas de promoción de energías renovables y de

eficiencia energética y los sucesivos paquetes de energía y clima, que han servido para impulsar hitos como el sistema de comercio de derechos de emisiones de carbono.

Estos programas están dando sus frutos. De acuerdo a los últimos informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la UE, de manera conjunta, está en condiciones de conseguir las metas fijadas para 2020, que incluyen un recorte del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un 20% de mejora de la eficiencia energética y un 20% de uso de renovables.

Aunque conviene ser cautos en relación con esto. Los últimos datos hechos públicos por Eurostat hace tres semanas constatan que la UE había alcanzado en 2016 un 17% de cuota de renovables, es decir, tres puntos por debajo de la meta a 2020. Si bien la Comisión es optimista con la capacidad de Europa para alcanzar el 20%, a la vista de los datos será necesario incrementar el ritmo de crecimiento. Por tanto, más que autocomplacencia se impone la autoexigencia.

Con todo, y en relación a las emisiones de carbono, informes recientes de la Comisión Europea constatan que estas se han reducido en la Unión un 23% con respecto a 1990, mientras el PIB ha crecido un 53%. Lo cual evidencia un desacople entre emisiones y crecimiento que demuestra que la apuesta por políticas respetuosas con el medio ambiente no solo no frena el crecimiento y la creación de empleo, sino que lo acelera.

Sí, Europa siempre ha estado a la vanguardia. Y puede y debe seguir estándolo.

Lo estuvo hace dos años en París, donde los líderes europeos se comprometieron a reducir las emisiones un 40% para 2030 y entre un 80 y un 95% para 2050.

Pero Europa parece haber perdido el ímpetu a la hora de traducir esos compromisos en medidas legislativas que transformen las palabras en hechos.

No se puede negar que tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, los dirigentes de la UE han dado categoría de prioridad a la política climática y energética, dos caras de la misma moneda. Y ello se ha traducido en una intensa actividad legislativa que ha tenido su culmen en el Paquete de Energía Limpia presentado por la Comisión en noviembre de 2016.

Un paquete que, entre otras, incluye propuestas para un nuevo diseño del mercado de la electricidad, promover una mayor integración de las energías renovables, aumentar la eficiencia energética y crear una oferta más amplia y un papel más protagonista para los consumidores.

Pero, al mismo tiempo que elevaba la prioridad, el corsé que los Estados miembros, a través del Consejo, han impuesto a la Comisión Europea ha frenado la ambición que ésta ha podido imprimir a sus propuestas.

El problema principal del Paquete de Energía es la falta de correspondencia entre lo que los líderes de la UE se habían comprometido a promover y el terreno de juego que le han fijado a la Comisión con sus orientaciones.

De poco sirve comprometerse, como lo hizo el Consejo en 2014, a “aplicar rápida y plenamente el Acuerdo de París” y a “contribuir al cumplimiento de los objetivos de financiación en materia climática y seguir liderando la lucha contra el cambio climático”, cuando se imponen objetivos alejados de las metas fijadas.

De poco sirve reiterar estos objetivos al calor de la cumbre climática convocada por Macron en Francia el pasado mes de diciembre y, acto seguido, rebajar aún más la ambición de las propuestas presentadas por la Comisión.

No podemos dejar escapar la oportunidad que ahora tenemos.

Con sus luces y sombras, este paquete legislativo constituye una ocasión inmejorable para estimular las inversiones y la innovación asociada, aumentar la seguridad energética y generar dinámica económica y empleo, mejorando la competitividad y reduciendo las emisiones.

En definitiva, una oportunidad para modernizar nuestra economía y cumplir con los compromisos energéticos y climáticos.

Así lo ha comprendido el Parlamento Europeo, que el pasado mes de enero votó a favor de aumentar la ambición en materia de eficiencia y promoción de renovables, así como de dotarse de instrumentos más exigentes en materia de gobernanza de la Unión de la Energía.

El Parlamento ha sido inequívoco al reclamar que Europa corrija su camino porque la propuesta de la Comisión (y la posición del Consejo) son insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de París.

Por ello, del éxito de las negociaciones que las tres instituciones emprenderemos a finales de mes dependerá el futuro energético y económico de la Unión.

La eficiencia es clave no sólo para reducir la factura energética, descarbonizar la economía y garantizar la seguridad de suministro, sino también para fortalecer la competitividad económica, y combatir la pobreza energética.

Un 75% de nuestro parque de edificios es ineficiente. Aquí es donde la eficiencia energética cobra especial importancia, con un gran potencial de ahorro. Además, de manera rentable y generadora de posibilidades de empleo.

Precisamente por ello, el Parlamento ha ido más allá en sus exigencias, al elevar del 30% a, al menos, el 35% el objetivo para 2030.

El Parlamento también aprobó su posición sobre el reglamento de Gobernanza, el nuevo instrumento para la coordinación de las acciones a nivel europeo que deben garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia energética y climática.

El Parlamento corrigió las ambigüedades existentes en la propuesta original, y lo enmendó reforzando la supervisión de los objetivos de penetración de renovables, de eficiencia y de recorte de emisiones.

Y también ratificó su posición sobre la Directiva de energías renovables, de la que, como saben, soy ponente del Parlamento.

Tras formular mi propuesta el pasado mes de mayo, y después de duras negociaciones con las fuerzas políticas para tratar de alcanzar amplios acuerdos en torno a la misma, el Parlamento aprobó por amplia mayoría un texto ambicioso y coherente con las oportunidades que presenta la energía limpia.

Y no por capricho.

Las últimas cifras indican que, a nivel global, se están batiendo records en inversión y despliegue de renovables. Los costes se han reducido considerablemente en tecnologías de producción más maduras, a una velocidad mucho mayor de la esperada.

Citando el último informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de la solar fotovoltaica ha caído un 73% desde 2010. Y se espera que se reduzca a la mitad en 2020. En cuanto al coste de generación con energía eólica terrestre, este ha disminuido alrededor de un 25% a lo largo de la década.

El mismo informe destaca que la eólica terrestre se está contratando habitualmente a 4 centavos de dólar por kilovatio. Para que se hagan una idea, el rango de costes para la generación de energía con combustibles fósiles oscila entre los 5 y los 17 centavos.

La Unión Europea no puede perder pie si no quiere no sólo incumplir sus compromisos, sino poner en cuestión su propio desarrollo futuro.

Se trata de algo que ahora mismo no está asegurado.

Tal y como constata un reciente informe de Bloomberg, 2017 ha sido el año de menor inversión en renovables de la última década en Europa. Y desde el pico alcanzado en 2011, la inversión se ha desplomado casi un 60%. Para poner estas cifras en contexto, las inversiones necesarias en generación de energía eléctrica limpia se estiman del orden de más de 1 billón de euros hasta 2030.

Por tanto, si Europa quiere liderar la transición energética, cumplir sus compromisos ambientales y reforzar su competitividad económica, necesita una Directiva acorde con los retos futuros.

El Parlamento lo ha comprendido. De ahí que con el acuerdo de fuerzas de todo el arco parlamentario, y el único rechazo de los euroescépticos, hayamos puesto encima de la mesa propuestas ambiciosas para superar el inmovilismo de los Estados miembros.

El Parlamento ha dado un golpe en la mesa al apoyar de forma abrumadora elevar la meta del 27% de cuota de renovables planteada por la Comisión a, al menos, el 35%.

Necesitamos una meta que realmente incentive la inversión.

La propia Comisión reconoce que, sin actualizar las políticas vigentes, se alcanzará un 27% en 2030. ¿Qué mensaje estamos trasladando con una meta que no varía del escenario tendencial?

Sin embargo, en diciembre el Consejo ratificó el 27%, ignorando la realidad y estudios más recientes, como el de IRENA, que sitúa en el 34% el despliegue rentable de renovables en Europa.

Otro de los caballos de batalla es el de cómo asegurarnos que los Estados miembros se comprometen con la transición hacia un sistema basado en energías limpias.

Para ello, el Parlamento ha fortalecido los criterios para el establecimiento de los planes de apoyo. Aunque los basados en mercado promueven una mayor competencia y bajan los costes del fomento de renovables, pueden no resultar eficaces desde el punto de vista del sistema y la sociedad.

Por esto se ha establecido que los Estados miembros puedan decidir sobre su diversificación tecnológica, para así poder tener en cuenta sus condiciones ambientales, geográficas o climáticas específicas.

Asimismo, para movilizar y abaratar la financiación también es importante un marco regulatorio seguro. Justo lo contrario de lo que han provocado los cambios retroactivos introducidos en las políticas de apoyo a las renovables en varios Estados miembros. Entre ellos, el nuestro.

Esto ha provocado pérdida de confianza e inseguridad en el sector y falta de acceso a la financiación para nuevas instalaciones, perjudicando seriamente a la industria y al mantenimiento o creación de empleo.

Y no nos llevemos a engaño: estamos hablando de un conjunto de medidas que generarán 1 millón de puestos de trabajo y una expansión del PIB de un 0,7%. Más si incrementamos la ambición.

Blindar la UE como territorio seguro jurídicamente es crucial para garantizar la llegada de las inversiones que necesita movilizar este proceso de transición energética. Por tanto, se prohíben las medidas retroactivas.

Es más, hemos defendido la inclusión de compensaciones en caso de cambios externos que afecten considerablemente a la viabilidad económica de los proyectos apoyados.

En cuanto al autoconsumo, lo hemos reconocido como un derecho. Y hemos eliminado trabas administrativas, así como las tasas a la energía autoconsumida que no pasa por las redes en ningún momento. De esta manera, se asegura que los autoconsumidores tienen un marco regulatorio justo para su actividad.

Y permítanme un inciso.

No puedo entender el empeñamiento del Gobierno español en medidas como el impuesto al sol. No solo ha forzado al Consejo a contemplar la autorización de medidas como esa, sino que incluso ha intentado forzar en el Parlamento una votación en el mismo sentido con el resultado que todos conocen: el 90% de la cámara votando en contra. ¿Es este el ejemplo de lo que quiere hacer el Gobierno cuando anuncia su Ley contra el Cambio Climático? Si hay un camino en la lucha contra el calentamiento global es justo el contrario.

En materia de transporte, en el Parlamento apostamos por elevar el objetivo de penetración de renovables en un sector que representa cerca de un tercio del consumo final de energía en la UE, y que sigue dominado en un 94% por los combustibles fósiles.

Los que vivimos en ciudades como Madrid, sabemos que además existen problemas de polución que ponen en riesgo nuestra salud, por no hablar de la congestión.

Debemos repensar el transporte, apostando por la electromovilidad, e impulsando los combustibles renovables avanzados. Y para ello hacen falta infraestructuras. Por ejemplo, con una adecuada red de puntos de carga, facilitaremos la adopción de la movilidad eléctrica.

Como ven, el Parlamento ha aprobado un amplio catálogo de medidas, de medidas concretas, para hacer cumplir lo prometido en París.

En breve, Parlamento y Consejo comenzaremos las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre los textos finales. Las posiciones están muy alejadas, por lo que las negociaciones no serán fáciles.

Con todo, los Estados miembros debieran reflexionar sobre las posiciones que aprobaron en diciembre y modificarlas antes del inicio de las negociaciones. Porque van contra el signo de los tiempos.

En primer lugar, porque, reitero, contravienen los compromisos adquiridos en París.

En segundo lugar, porque contravienen los compromisos establecidos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, impulsando la energía renovable y duplicando la tasa mundial de eficiencia.

En tercer lugar, porque contravienen nuestros propios intereses, económicos y ambientales. Si algo demuestra el desacople crecimiento-consumo energético-emisiones es que frenar la transición energética es frenar el desarrollo y competitividad de nuestras sociedades.

Afortunadamente, cada vez son más las voces que se elevan apostando sin ambages por fomentar la transición hacia una economía descarbonizada.

El pasado mes de diciembre, al calor de la cumbre climática de París, el Banco Mundial anunciaba que después de 2019 dejará de financiar las operaciones de exploración y producción de petróleo y gas.

Por su parte, la aseguradora AXA avanzaba que no invertirá en empresas cuyos ingresos provengan en más de un 30% de centrales de carbón o que estén invirtiendo en nuevas centrales basadas en este combustible.

Asimismo, se constituía un grupo de trabajo de fondos soberanos, entre ellos Qatar, Kuwait, Arabia Saudí o Noruega, con la intención de orientar inversiones en apoyo de las metas fijadas en el Acuerdo de París.

Pocos meses antes, un estudio elaborado por Morgan Stanley constataba que las renovables van a convertirse en solo dos años en las energías más baratas del planeta. Algo que, como les decía, IRENA viene de ratificar el mes pasado.

Países como Noruega ya han anunciado que no se podrá comprar un coche de gasolina o diésel a partir de 2025, medida que estudia replicar China. Y fabricantes como Volvo ya han comunicado que a partir del año próximo solo lanzará al mercado vehículos eléctricos o híbridos.

En Francia, la última central de carbón echará el cierre en 2021. En Reino Unido e Italia, en 2025. De hecho, estos países, junto a una veintena más, firmaron en la Cumbre de Bonn una declaración en la que apuestan por el cierre de las centrales de carbón e instan a los inversores a alejarse de esta forma de producir energía.

No así España, que no solo se ha quedado fuera de esa declaración, sino que está torpedeando decisiones empresariales sobre el cierre de centrales de carbón. Y con argumentos, además, insostenibles como revelaba hace unas semanas el informe de Deloitte que evidenciaba que, lejos de provocar una subida de la factura de la luz, la incorporación de renovables la abaratará hasta un 35% en 2030 (y hasta un 55% en 2050). Todo lo cual, repercutirá en una mejora de la competitividad de nuestra industria al reducir los costes energéticos.

Como ven, esta es la realidad de nuestro entorno. Espero y deseo que en las negociaciones por venir el Consejo reflexione y se sume al clamor emanado del Parlamento.

Y espero y deseo que el Gobierno de España contribuya a que el Consejo se aproxime al Parlamento, dando un giro de 180 grados a las posiciones que hasta ahora ha defendido.

No caben excusas.

Nuestro país no puede permitirse actuar de freno a una política energética ambientalmente más ambiciosa estando como está en primera línea de exposición a las consecuencias del cambio climático. Al contrario, debe volver a colocarse a la vanguardia.

Es más, por sus características, España tiene condiciones para liderar el impulso al desarrollo de las energías limpias, y ello, además, generando actividad económica y empleo.

Así lo demuestra la experiencia histórica de un sector que en 2011 llegó a generar casi 130.000 empleos en España, hoy reducidos a apenas 75.000, lo cual es prueba de que, con las políticas adecuadas, su impulso debe ofrecer nuevas oportunidades de futuro, también en zonas económica e históricamente dependientes de actividades ligadas a fuentes de energía contaminantes.

Tenemos, por tanto, la oportunidad de aprobar una regulación que realmente contribuya a lo acordado en París y que sitúe a Europa en el primer lugar mundial en el sector de las energías limpias impulsando el crecimiento ecológico.

Si, como dejó dicho un conocido presidente americano, “la realidad suprema de nuestro planeta es su vulnerabilidad”, este es el momento de sentar las bases del cambio de paradigma energético sobre el que sustentar el combate contra el cambio climático.

Aprovechemos, por tanto, el momento para acelerar la lucha contra el calentamiento global. Como dice el catedrático y asesor especial del secretario general de la ONU Jeffrey Sachs, “nuestra generación puede ser la que acabe con la pobreza, responda a las necesidades básicas alcanzando la justicia social y controle finalmente el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad”.

En nuestra mano está no frustrar estos anhelos.

Muchas gracias.